



**UNIVERSIDAD DEL SALVADOR**  
**FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

**TRABAJO FINAL**

**SISTEMA JUBILATORIO**  
**ARGENTINO**

USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

**TUTOR: RODRIGUES ALMEIDA**  
**ALUMNO: IBAÑEZ ENRIQUE TOMAS**

# INDICE

1. OBJETIVO	1
2. TRANSFORMACION Y BREVE HISTORIA DE LA PREVISION SOCIAL EN ARGENTINA	2
3. SIJyP	8
3.1. REGIMENES INCLUIDOS	8
3.2. DESCRIPCION Y PRESTACIONES	9
4. REGIMEN DE REPARTO	21
4.1. PROBLEMAS	22
4.2. PROPUESTAS	25
5. VARIABLES DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES	25
5.1. DEMOGRAFICAS	26
5.2. ECONOMICAS Y SOCIALES	29
5.2.1. CAMBIOS EN EL SIST. DE TRABAJO Y SU VINCULO CON LA PREVISION SOCIAL	29
5.2.2. SITUACION FINANC. DEL SIST. PREV. AL MOMENTO DE LA REFORMA DE 1994	33
5.2.3. SITUACION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	40
5.2.4. COMISIONES	45
6. LINEAMIENTOS PARA LA REFORMA PREVISIONAL	49
6.1. UAFJP	49
6.2. MINISTERIO DE TRABAJO	50
6.3. COMENTARIOS	57
7. CONCLUSION	60
8. BIBLIOGRAFIA	64

USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

## 1-OBJETIVO

El tema elegido para desarrollar la investigación y poder arribar a mis conclusiones es el Sistema Jubilatorio Argentino.

Se realizará un breve recuento de la legislación que regula la estructura y el funcionamiento de las administradoras privadas, detallando sólo las principales normas para darnos el marco de referencia necesario para tener una visión más familiar, observando la débil coherencia, transparencia y claridad de las políticas de seguridad social con las disposiciones de los regímenes.

Se analizará, los distintos sistemas, sus formas de financiamiento, sus crisis, sus problemas, sus incongruencias entre los hechos y los objetivos de su creación, y demostrar que el éxito de los sistemas depende más que nada del contexto del país en el cual es puesto en marcha el mismo.

Asimismo se hará un análisis de la viabilidad de los lineamientos del nuevo proyecto de reforma que se quiere llevar a cabo por parte del Estado Nacional y la propuesta por parte de la unión de las AFJP.

En este trabajo se intenta demostrar que el cambio en el sistema previsional Argentino, llevado a cabo en 1994, al pasar de un régimen de reparto puro, a otro mixto, es decir, con un componente de capitalización individual, administrado por las AFJP, y otro de reparto, controlado por el Estado, no produjo más eficiencia o equidad, sino más bien, ésta reforma logró lo contrario.

## **2-TRANSFORMACION Y BREVE HISTORIA DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL EN ARGENTINA.**

La convergencia de diversas razones implicadas a su vez por diferentes causas, explican y justifican los profundos cambios encarados por el Estado Nacional Argentino en materia de políticas relacionadas con la seguridad social.

Descifrar estas razones exige un análisis preliminar de las condiciones culturales, políticas y jurídicas imbricadas en el desempeño de la seguridad social, al mismo tiempo teniendo en cuenta estos factores históricos es objeto de análisis la configuración misma del Estado de Bienestar a la luz de fenómenos tales como la transformación del Estado Argentino, la reconversión de la economía, la reformulación de la política de recursos humanos, de innovación tecnológica, el desempleo y el proceso de la globalización económica, entre otros.

A principios del siglo XX comienza a plantearse en la República Argentina la necesidad y conveniencia de implantar políticas de previsión social. Originariamente la previsión social era de carácter fragmentario y respondía a la acción de algunos grupos de trabajadores interesados en proveerse de recursos para cuando dejaran el mercado de trabajo o sufrieran impedimentos para trabajar. De allí, su organización a través de entes autónomos, instituidos por ley. Hubo una marca de origen que se repetiría a lo largo de la historia: la multiplicidad de los organismos de gestión a cargo de las prestaciones, estos entes respondían a similares criterios de especialización en algunos casos, y en otros, estaban relacionados por la actividad laboral practicada por los beneficiarios, basando su cobertura en las contingencias por vejez, la invalidez y la muerte que pudieran sufrir los trabajadores inscriptos.

Posteriormente se crean institutos para funcionarios del Estado Nacional, igualmente las provincias instituyen regímenes jubilatorios para empleados públicos, específicamente en el año 1904 mediante la Ley N° 4.349 se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles con atribuciones para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos.

En el año 1915 la Ley N° 9.653 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para el sector ferroviario, en el año 1919 la Ley N° 10.650 Nuevo Régimen jubilatorio para el sector ferroviario, en el año 1921 la Ley N° 11.110 Caja de Servicios Públicos, en el año 1923 la Ley N° 11.232 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias, en el año 1929 la Ley N° 11.575 Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, en el año 1939 la Ley N° 12.581 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas y en el año 1939 la Ley N° 12.612 Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante Nacional.

Hacia la década de los años treinta, los regímenes jubilatorios sufren una intensa crisis que los coloca al borde del colapso. Las secuelas de la gran depresión, a la que no fue ajena Argentina, sumadas a la permisividad y extrema generosidad de los regímenes, obligaron al Estado a reconvertir su estructura y limitar severamente las prestaciones.

La decisión provocó conflictos que fueron resueltos en la esfera judicial, la Corte Suprema declaró la razonabilidad y legitimidad de la acción estatal. Diversos fallos del más alto tribunal, acatados por los jueces inferiores de distintas competencias, contribuyeron a conjurar la crisis de modo definitivo.

Entrada la década de los años cuarenta, en consonancia con el desarrollo del Estado de bienestar en los países centrales, el sistema se expande y universaliza incorporando a casi la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia. La universalización dotó al sistema de una relación óptima entre activos y pasivos. Así, los ingresos eran superiores a los egresos. El sistema funcionaba con criterios de capitalización, toda vez que las prestaciones jubilatorias representaban una contrapartida de las contribuciones y aportes.

El desarrollo industrial fue acompañado de pleno empleo y de una razonable consistencia del signo monetario, permitiendo el normal desempeño del Sistema Previsional y convirtiéndolo en una de las coberturas más amplias e integrales de Latinoamérica.

A fines del decenio de los años cincuenta, la racionalidad que presidía el funcionamiento del sistema fue erosionada seriamente a raíz de la sanción de la ley 14.449. Este dispositivo jurídico que introdujo algunos conceptos propios del sistema de reparto, conservando, sin embargo, aspectos importantes de capitalización, alteró las premisas básicas aplicadas por la legislación sustituida para determinar el monto de la prestación



jubilatoria, confiriendo a los beneficiarios el derecho de elegir su mejor productividad marginal para configurar el monto del haber jubilatorio y asegurándole la percepción de un monto equivalente de 82 por ciento del salario de actividad, actualizable según el incremento del salario activo de referencia, con topes máximos.

En 1.958 se incorporó el principio de movilidad de las prestaciones consagrado por la Constitución Nacional, con lo que se acentuó la tendencia distributiva y social.

Durante la década del 60, la situación del régimen previsional se complicó, producto de sucesivas crisis económicas del país y de una crónica inflación que devastaba los haberes jubilatorios, agravada también por la mala gestión de los institutos previsionales.

Se hizo necesaria, por lo tanto, la unificación legislativa e institucional de los diversos sistemas previsionales mediante la promulgación de dos leyes: La Ley 18.037 para el personal en relación de dependencia y la Ley 18.038 para los trabajadores autónomos. Las trece cajas existentes hasta ese momento se convirtieron en sólo tres: Comercio y Actividades Civiles, Caja del Estado y Servicios Públicos y Caja para Trabajadores Autónomos.

La ley 18.037 reformuló el sistema con el objeto de resolver su crisis estructural. Sin embargo, careció de la profundidad necesaria y no eliminó los criterios de actualización fundados en las reglas de asignación que regulan la distribución sobre la base de principios de mercado: la Justicia Conmutativa.

Si bien la ley se orientaba hacia el reparto, conservaba poderosos valores inspirados en criterios mercantilistas, conservando los derechos derivados de la productividad marginal del beneficiario aunque fijando topes máximos a las prestaciones.

El sistema de seguridad social sufrió reformas parciales a lo largo de dos décadas, en su gran mayoría orientadas a flexibilizar las condiciones para acceder a beneficios, sin consideración alguna en relación con el financiamiento genuino y autónomo de los entes previsionales.

Así el incremento de la masa de beneficiarios fue explosivo. En el lapso entre 1973 y 1982, la cantidad de beneficiarios creció en un 64 por ciento aproximadamente.

Entre 1983 y 1989, los organismos de seguridad social sufrirán el embate de miles de acciones judiciales cuyas consecuencias lo colocaron al borde de la implosión. Las sentencias judiciales y el galopante proceso inflacionario que culminó con la hiperinflación

declarada en julio de 1989, obligaron a las autoridades nacionales a adoptar medidas excepcionales tendientes a regularizar la situación y reordenar las instituciones de seguridad social.

Mediante la Ley 23.769, se creó el Instituto Nacional de Previsión Social, con la premisa de unificar la administración y gestión del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados en relación de dependencia y para autónomos. Esta entidad absorbió la administración que hasta ese entonces tenían encomendadas las tres cajas de Previsión Social que mencioné anteriormente. Este instituto se disuelve en Noviembre de 1991 mediante el decreto 2284/91. Esta norma dispuso que las funciones de la entidad previsional fueran transferidas al Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social. Un mes después Diciembre de 1991, se creó la actual Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La entidad tiene a su cargo la administración y gestión (la facultad de fiscalizar, recaudar y ejecutar los recursos de la Seguridad Social fue transferida a la DGI con el Decreto 507/93) de las jubilaciones y pensiones nacionales, y los servicios correspondientes a las asignaciones familiares y el desempleo. Debido al alto grado de endeudamiento de las arcas fiscales, especialmente los recursos específicos de la Seguridad Social, y como una manera de cristalizar y legitimar las deudas arrastradas de años anteriores, se sancionaron las Leyes 23.982 y 24.130, denominadas de "Consolidación de deudas pasivas del Estado". El objeto fue abonar las deudas del Estado mediante la emisión de bonos públicos que cotizan en el mercado de valores.

El Pacto federal para el Crecimiento, el Empleo y el Desarrollo, celebrado entre el Estado Nacional y las provincias en el año 1993, estableció, entre otros acuerdos convenidos, que las provincias que se encontraban en condiciones transfieran las cajas previsionales provinciales al Estado Nacional.

Así en el mes de Octubre de 1993 se sanciona la Ley 24.241 que derogaba las leyes 18.037 y la ley 18.038 y creaba, con vigencia a partir del 14 Julio de 1994 el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241), norma que modifica la seguridad social en Argentina. De su contenido integral, sobresale la instauración de un régimen mixto y combinado de prestaciones: el Régimen Público de Reparto, a cargo del Estado y financiado con el aporte personal de los trabajadores adheridos a dicho régimen y las